

Santiago, diez de julio de dos mil veinticinco.

A los alegatos solicitados en escrito folio N° 6: atento a lo dispuesto por el Auto Acordado sobre la forma de conocimiento del recurso de Apelación de los Recursos de Amparo ante esta Corte Suprema, registrado en el Acta N° 105-2024 de esta Excm. Corte Suprema, publicado con fecha 17 de mayo de 2024, y no habiéndose justificado suficientemente la necesidad de escuchar alegatos en atención al derecho invocado, no ha lugar.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus fundamentos usados para acoger el recurso, los cuales se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

1º) Que, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo, del artículo 5º de la Constitución Política de la República *“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”*.

2º) Que así, adquiere relevancia en la materia el Estatuto de la Corte Penal Internacional, también denominado Estatuto de Roma, que corresponde a un tratado internacional ratificado por Chile y publicado en el Diario Oficial el 1 de agosto de 2009, que establece una jurisdicción complementaria a las jurisdicciones penales nacionales para perseguir los más graves delitos de trascendencia internacional, entre ellos, los de lesa humanidad. Lo anterior ya que la consideración de estas reglas constituye un estándar internacional exigible para



la ejecución de toda condena por los referidos ilícitos; de tal modo que las reglas del derecho interno han de interpretarse conforme al derecho internacional de los derechos humanos y a los principios, reglas y directrices que establecen los tratados internacionales aplicables en la materia.

3º) Que, dicho lo anterior, se debe señalar que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, establece en el numeral 4, de su artículo 110, referido al examen de una reducción de la pena que: *“Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores: a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos; b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena”*.

4º) Que, a su vez, las Reglas de Procedimiento y Prueba del Estatuto de Roma, relativo al examen de una reducción de la pena con arreglo al artículo 110 del referido Estatuto de la Corte Penal, establece en su Regla 223 que, al examinar una reducción de la pena se tendrán en cuenta los criterios enumerados en el párrafo 4 a) y b) del artículo 110 y, entre otros, letra *“a) La conducta del condenado durante su detención, que revele una auténtica disociación de su*



crimen”; lo que esta Corte ha entendido importa como conciencia del delito y del daño causado (SCS N° 149.153-2020).

5°) Que, las normas señaladas corresponden a tratados internacionales relativos a una jurisdicción complementaria a las penales nacionales para perseguir delitos de lesa humanidad, que al haberse incorporado al derecho interno de conformidad al artículo 5° de nuestra Constitución Política, deben servir para interpretar la Ley N° 19.856 y su Reglamento determinando un sentido y alcance de la normativa interna que armonice con las reglas de derecho internacional.

6°) Que, de este modo encontrándose los amparados cumpliendo penas por delitos que se han catalogado como de lesa humanidad, resulta indispensable, para los efectos de otorgar el beneficio de reducción o rebaja de condena, que cumplan con los requisitos señalados en la Ley N° 19.856, pero, además, con aquellos contenidos en el Estatuto de Roma y en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

7°) Que, asimismo, cabe indicar que no sólo la judicatura se encuentra obligada a respetar y aplicar en sus decisiones los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, sino que lo mismo corresponde a todo órgano del Estado, los cuales deben ceñir su acción a dicha preceptiva más aún si ésta aparece vinculada a derechos fundamentales que, conforme al tantas veces citado artículo 5° de la Carta Fundamental, limitan el ejercicio de la soberanía nacional.

8°) Que, conforme a los actos administrativos que fundamentan la decisión de rechazo, ninguno de los encausados reconocieron alguna participación en los



delitos cometidos ni colaboraron en su investigación, con lo cual no concurre el requisito del N°4 letra a) del artículo 110 del Estatuto de Roma, que exige que el recluso manifieste desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar, desde que en una primera oportunidad el recurrente niega haber intervenido en alguna actividad vinculada a la víctima.

9º) Que, en consecuencia, las decisiones contenidas en los Decretos Exentos N° 1610, 1611, 1725, dictados los dos primeros el 12 de junio último y el tercero el 19 del mismo mes y año, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que rechazaron el beneficio de reducción de condena respecto de los amparados, en razón de la naturaleza del delito por el cual fueron condenados y de la normativa internacional aplicable a delitos de lesa humanidad, no resulta ser ilegal ni tampoco arbitraria.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **se revoca** la resolución apelada de veintiséis de junio de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en el Ingreso de Corte N° 2482-2025 y, en su lugar, se declara que **se rechaza** el recurso de amparo interpuesto a favor de Gonzalo Maass del Valle, José Miguel Morales Morales y Gabriel Matus Hernández.

Se previene que el Ministro señor Valderrama concurre a la decisión de mayoría, ello en consideración al hecho que, si la solicitud de rebaja de condena se formula ante el Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia, y la reducción se concede por decreto supremo bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República” una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos objetivos para su concesión, la intervención de la autoridad ministerial



no puede entenderse limitada o circunscrita a una actuación meramente formal -dictar el decreto supremo que reduce una condena-, pues una decisión tal, materializada a través de ese acto administrativo le irroga responsabilidad, desde luego política. Es por tal razón entonces, que la ley que regula la materia le reconoce al Ministerio de Justicia la facultad de verificar, en último término, el cumplimiento por parte del condenado de los requisitos concluir, en el examen final que está llamado a efectuar, que aquél no satisface alguno de ellos, como precisamente ha ocurrido en la especie, decisión que no entra en colisión con lo dictaminado por el órgano calificador.

Acordada lo anterior con los votos en contra de la Ministra señora Letelier y la Ministra (S) señora Quezada, quienes fueron de la opinión de confirmar la resolución apelada, en virtud de las siguientes consideraciones:

1°.- Que el beneficio de reducción de condenas de las penas privativas de libertad que se cumplen de manera efectiva se encuentra regulado en los títulos I y II de la Ley N° 19.856, de donde deriva que la decisión de reducir el tiempo de la condena privativa de libertad está radicada en la "Comisión de beneficio de reducción de condena", compuesta por jueces e integrada también por el Secretario Regional Ministerial de Justicia, estando claro que la ley previene que ese órgano es el que resuelve soberanamente sobre el otorgamiento o rechazo del beneficio de que se trata. De acuerdo con la normativa legal, deben distinguirse en el proceso de rebaja dos actos administrativos centrales: el primero, de carácter resolutivo, radicado en la citada Comisión, y, el segundo, constituido por el decreto que permite la ejecución de lo anterior.



2°.- Que, así las cosas, cuando se revisa por otra autoridad administrativa el mérito de lo obrado por la ya referida Comisión, disponiéndose constatar nuevamente la concurrencia de las exigencias ya comprobadas, se desconoce la conclusión del acto resolutivo -cuestión que se encuentra regulada en la Ley N° 19.880- que reconoció la procedencia del beneficio, y, por tal razón, importa una actuación que excede las competencias legales en virtud de las cuales obró la administración.

3°.- Que, a las razones indicadas, cabe agregar que, de la misma forma que se mencionan instrumentos internacionales para justificar el acto denegatorio, tomando en consideración la edad de los amparados, también debe observarse la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual debe ser interpretada en busca de ampliar los beneficios que reconozca el derecho internacional o las legislaciones internas de los Estados Parte, a favor de la persona mayor, de tal manera que es un insumo que fomenta beneficios como el que nos convoca, no existiendo razones suficientes para desconocer su procedencia.

4°.- Que, en este orden de consideraciones, las actuaciones recurridas, ciertamente, afectan la garantía constitucional de libertad personal de los amparados, ya que, por su intermedio, se aumenta su tiempo de privación de libertad, excediendo la autoridad, en este caso, sus facultades, afectando su derecho a la libertad personal.

Comuníquese por la vía más expedita.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 25533-2025.





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., María Teresa De Jesús Letelier R., Ministra Suplente Eliana Victoria Quezada M. y los Abogados (as) Integrantes Pía Verena Tavolari G., Eduardo Nelson Gandulfo R. Santiago, diez de julio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a diez de julio de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

